

La recuperación democrática del territorio y el medio ambiente

Grupo Democracia y Territorio

El Grupo Democracia y Territorio está formado por Elizabeth Anaya, René Coulomb, Roberto Eibenschutz, Daniel Hiernaux, Jorge Legorreta, Telésforo Nava, Enrique Ortiz, Emilio Pradilla, Santos Ruiz y Rino Torres. Es un grupo de planificadores e investigadores de diversas orientaciones teóricas y políticas que, ante la coyuntura socioeconómica, política y territorial que vive México, y en particular el proceso electoral, ha decidido impulsar un amplio debate con los diversos sectores de la sociedad civil y los candidatos a puestos de elección popular de los diferentes partidos políticos, para construir una Política Alternativa de Desarrollo Territorial y Ambiental, tendiente a superar la grave crisis actual de estos componentes de la realidad social. Como aporte al debate, ha elaborado la presente propuesta, que pretende transformar y enriquecer con los aportes de los individuos y organizaciones que participen en el diálogo.



Presagio de tormenta, Zacatecas Foto: Pedro Valtierra/Cuartoscuro

La crisis territorial y ambiental actual



Pidiendo pa' su muerto en las calles de la ciudad
Foto: Rodolfo Valtierra/Cuartoscuro

El patrón de crecimiento económico e industrialización seguido por México en la posguerra dio lugar a una forma de organización territorial caracterizada por la desigualdad en el desarrollo regional, la concentración metropolitana, el crecimiento urbano anárquico, la inequidad en la distribución de los bienes y servicios sociales, y la acumulación de déficit

de condiciones materiales de vida para los sectores mayoritarios de la población. La planeación y las políticas territoriales estatales fueron ineficaces para resolver estos problemas y orientar una organización del territorio acorde con las necesidades de desarrollo económico y social sostenido y la justa satisfacción de las necesidades sociales de toda la población.

La crisis económica iniciada a mediados de los años setenta y profundizada desde 1982, la reestructuración económica y las políticas neoliberales puestas en marcha por el Estado y el grupo de grandes y nuevos empresarios privilegiados por el gobierno, para recuperar a cualquier precio el crecimiento, han agravado los viejos problemas territoriales. Y al dar lugar a un modo distinto de organización regional y urbana, regido por la lógica del mercado y la ganancia individual, desregulado y sin planeación, están generando nuevos procesos contradictorios. Su impacto inmediato ha sido el deterioro constante de las condiciones materiales y sociales de vida de la mayoría de la población rural y urbana. Pero en el mediano y largo plazos su carácter transnacionalizante, elitista, segregador y depredador pone en grave riesgo la soberanía nacional, el desarrollo económico y social sostenido y los recursos naturales y humanos de México.

El proyecto neoliberal gubernamental en su conjunto, por su naturaleza misma, no busca resolver las contradicciones territoriales; simplemente las refuerza, al dejar en manos del gran capital nacional y transnacional y el mercado, la definición de tendencias, las presuntas soluciones a los problemas y los equilibrios sociales y territoriales. Al mismo tiempo, la realidad internacional y nacional, en sus aspectos económicos, políticos y sociales, constituye una seria limitación para la solución de los viejos y nuevos problemas territoriales.

Atraso en el campo, migraciones y crecimiento urbano acelerados

En el campo mexicano dominan: la escasez de tierra; el atraso técnico y la baja productividad del suelo y

los hombres; el desempleo masivo; los inestables, muy bajos e insuficientes niveles de ingreso; el incumplimiento de la legislación laboral; el déficit cuantitativo y cualitativo de infraestructura y servicios productivos y sociales; la dispersión y el aislamiento de los asentamientos humanos; pésimas condiciones materiales y sociales de vida de los habitantes; la comunicación y la desinformación; la antidemocracia, el autoritarismo, la violencia y la ausencia de participación social; y la pérdida de identidad cultural. Las comunidades indígenas son las más afectadas. Esta situación es la determinante del acelerado proceso de urbanización que ha caracterizado al país desde hace más de cuatro décadas.

Las reformas al artículo 27 constitucional y a la ley agraria, que abren las puertas a la disolución del ejido y la comunidad agraria, la reconstitución del latifundio, la penetración del gran capital en el campo, y el previsible impacto desintegrador del Tratado de Libre Comercio sobre el campesinado pobre, amenazan con aumentar significativamente la expulsión de familias campesinas, y acelerar aún más su migración hacia un número limitado de ciudades y hacia Estados Unidos, donde son sometidas a situaciones de aguda explotación, opresión, segregación y violencia. Sin embargo, el tema de los indocumentados y la libertad de movimiento de la fuerza de trabajo fue excluido totalmente de las negociaciones del TLC.

Desintegración territorial, desarrollo regional desigual y concentración urbana

El desarrollo de las distintas regiones ha sido profundamente desigual, dando lugar a la oposición entre regiones ricas y dinámicas, y

regiones pobres, atrasadas y estancadas. Como resultado de la concentración monopólica del capital y el centralismo político, la industria, el comercio, las finanzas, la actividad burocrática estatal, la inversión pública, las infraestructuras y servicios, la alta tecnología y la población se han concentrado en un número muy limitado de grandes metrópolis, sobre todo en la Ciudad de México. Las políticas estatales económicas, de dotación de infraestructuras y servicios y de desarrollo regional y urbano han seguido la

tendencia concentradora, acentuándola, y no han logrado orientar y generar un desarrollo equilibrado, que integre todo el territorio nacional y dé prioridad a las regiones y ciudades más atrasadas.

La política neoliberal gubernamental de globalización, transnacionalización, apertura comercial y financiera a toda costa ha acentuado estas tendencias, en el marco de una creciente integración subordinada a Estados Unidos y la profundización de la desintegración interna, que lesionan la soberanía nacional. El pri-



Vivienda en el Centro Histórico Foto: Juan Sotelo/Cuartoscuro

vilegio a la industria maquiladora de exportación en la frontera norte, a los polos costeros de turismo de lujo, a los puertos e infraestructuras de comunicación y transporte para el comercio externo, y a los servicios terciarios de alta tecnología en las grandes metrópolis, reproduce

de desempleados y subempleados. La liquidación o privatización de empresas paraestatales, la modernización de los procesos productivos, la flexibilización de las relaciones laborales, la desigual competencia de la pequeña y mediana empresa frente a los productos importados

tos de desnutrición, desatención médica, alta mortalidad, carencia de vivienda y servicios adecuados, bajos niveles educativos y culturales, lumpenización, violencia y desesperanza. Los más afectados son los niños y jóvenes, los ancianos y las mujeres. En estas condiciones, las ciudades se turgurizan y degradan, e impera la inseguridad.

El Programa Nacional de Solidaridad, política social básica del salinismo, ha sustituido la satisfacción estructural de los derechos humanos y sociales adquiridos por la atención parcial, discrecional, no planificada, desigualmente distribuida en el territorio, patrimonialista, corporativizada, manipulada políticamente, de las necesidades mínimas y las demandas sentidas coyunturales. Se trata de paliar los efectos de la pobreza y no sus causas estructurales. El asistencialismo para resolver los peores resultados de la política neoliberal, ha suplantado a la política de desarrollo social, de garantía de los derechos humanos constitucionales.

Crecimiento urbano anárquico, segregado, y regulación estatal ineficiente y discrecional

A pesar de la existencia de legislación, organismos de planeación urbana, planes de desarrollo y técnicos calificados, el manejo discrecional de la regulación urbana y las políticas autoritarias y sin sujeción a los planes de dotación de infraestructura y servicios por parte de las autoridades han permitido o impulsado un crecimiento urbano extensivo, disperso y anárquico de las ciudades, que devora la tierra agrícola y las reservas naturales, eleva irracionalmente los costos sociales de dotación de infraestructura y servicios, incrementa el tiempo y costo de transporte, limita la pro-



Curada de espanto Foto: Eloy Valtierra/Cuartoscuro

ampliadamente la concentración territorial, el desarrollo regional y urbano desigual y la integración subordinada, sin resolver las necesidades materiales y sociales de los trabajadores que se localizan en estos territorios privilegiados desde el punto de vista del gran capital. El TLC, en su actual estructura, agudizará estas tendencias.

Desempleo, pobreza extrema y subsistencia precaria en las ciudades

La industrialización y el crecimiento económico de la posguerra no lograron absorber a toda la nueva población trabajadora urbana resultante del crecimiento demográfico interno y la migración campesina, a pesar de la emigración masiva hacia Estados Unidos. La crisis incrementó rápidamente esta masa

indiscriminadamente, y la persistente inestabilidad del crecimiento han colocado estructuralmente por fuera del mercado laboral formal a una proporción creciente y mayoritaria de la población trabajadora. La incapacidad del mercado formal y las necesidades de subsistencia han conducido a la proliferación de actividades informales, sobre todo en las grandes ciudades, donde imperan ingresos inferiores a los necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas, la carencia de prestaciones sociales y servicios, las penosas condiciones laborales y la indefensión legal, en un marco de corrupción y represión por parte de los dirigentes corporativos y las autoridades administrativas.

La pobreza o la indigencia afectan a más de la mitad de la población mexicana, con sus correla-

ductividad de los trabajadores y multiplica las fuentes móviles y fijas de contaminación ambiental.

La discrecionalidad, la corrupción y la incoherencia de las acciones estatales en la aplicación de las normas y reglas de crecimiento urbano y de manejo de los usos del suelo han privilegiado las acciones especulativas de minorías, propiciando el crecimiento urbano anárquico, y han relegado los intereses colectivos y de los sectores populares. La extinción de la planeación, sustituida por la concertación coyuntural, fragmentaria y puntual, la desregulación y la entrega del crecimiento urbano al libre juego de las fuerzas del mercado, anárquicas y segregadoras por naturaleza, amenazan con agravar estas tendencias y penalizar aún más a la mayoría de los ciudadanos y, sobre todo, a los sectores populares.

Penuria extrema de suelo, vivienda y servicios para los sectores populares

El constante deterioro o la ausencia de salario que garantice el acceso de los trabajadores a vivienda y servicios dignos, debido al incumplimiento patronal de esa obligación constitucional, los coloca en la incapacidad para adquirirla en el mercado privado; y la insuficiencia y corporativización de los organismos y las acciones estatales obligan a los sectores populares mayoritarios a recurrir al mercado irregular de tierra ejidal, comunal y pública, a autoconstruir progresivamente viviendas inadecuadas, a organizarse y luchar reivindicativamente contra el Estado, y a aceptar condiciones inhumanas de habitación. Así se ha producido y consolidado la mayor parte de la vivienda popular urbana. La ideología y la práctica privatizadora han desestimulado la producción de vivienda en renta; y sus

usuarios carecen de una legislación federal inquilinaria que garantice sus derechos. En las formas precarias de vivienda en renta, dominan las malas condiciones habitacionales, la arbitrariedad de casatenientes y autoridades, la inestabilidad y las prácticas de desalojo.

Las reformas a la legislación agraria, que privatizan la tierra rural periférica a las ciudades, amenazan con eliminar la vía de urbanización popular, al introducir estas tierras al libre mercado y exacerbar la competencia por ellas con los usos capitalistas más rentables. La desregulación, rentabilización y privatización de los organismos y las acciones estatales de vivienda de interés social, en el marco del crecimiento del desempleo y el deterioro de los salarios de los trabajadores, cierran el acceso a sectores crecientes de población, que al mismo tiempo pierden la posibilidad de resolver su necesidad por las vías irregulares. El abandono de las políticas de reserva territorial, inadecuadamente aplicadas en el pasado, conduce al dominio del mercado privado del suelo y, por tanto, a una nueva estructura del sector vivienda, más excluyente aún para la mayoría.

Desigualdad territorial y social en el acceso a infraestructura y servicios sociales

La infraestructura y los servicios sociales existentes en campos y ciudades no garantizan, ni cuantitativa ni cualitativamente, la productividad y la reproducción de los recursos naturales, materiales y humanos requerida por el desarrollo económico y social de México, de cara a la nueva situación mundial y a proyectos como el libre mercado norteamericano. En su conjunto, han acumulado graves rezagos cuantitativos y cualitativos. Particularmente

los trabajadores del campo y la ciudad, **las comunidades indígenas**, los niños, jóvenes y mujeres, en sus áreas de vivienda, han sido los más excluidos y afectados por el déficit de estas condiciones esenciales de su reproducción individual y social. Estas carencias son más agudas en los estados y municipios atrasados, marginados, como parte y resultado del desarrollo regional desigual.

La privatización y mercantilización creciente y programada y la modernización selectiva, tienden a agudizar la desigualdad regional y urbana en su dotación, y a acrecentar la disparidad social en su distribución y la exclusión de los pobres e indigentes. La fragmentación derivada de la desincorporación de empresas de servicios públicos, impide la aplicación de políticas unitarias y dotadas de racionalidad global, sin que permita avanzar en la descentralización y democratización de su gestión. Los ciudadanos pierden todavía más el derecho a recibir del Estado servicios públicos adecuados y acordes con su situación económica, como contraparte justa a su aporte al presupuesto estatal. Los servicios de alta tecnología se convierten en privilegio de las grandes empresas, la alta burocracia y una fracción minoritaria de la intelectualidad.

En particular el transporte público, urbano y regional de pasajeros ha sido postergado por las políticas estatales, abriendo paso a la hegemonía de los sistemas privados más irracionales y contaminantes: el automóvil individual, los peseros, combis y microbuses y los autobuses foráneos en manos privadas. Un ejemplo claro es el ferrocarril. En consecuencia, se genera congestión vehicular, mayor consumo energético, elevados índices de contaminación ambiental, altos costos monetarios y gran consumo de tiempo, reducción de los

ingresos de los trabajadores y pérdida de horas laborables y productividad en el trabajo. Otro rubro crítico es el del agua potable, recurso escaso, donde privan la competencia entre el campo y la ciudad, entre la actividad económica y la reproducción social, entre los sectores sociales —con clara desventaja para los populares—, el uso irracional y los procesos acelerados de contaminación.

Destrucción de la naturaleza, contaminación ambiental y vulnerabilidad urbana

En México la explotación antitécnica, socialmente incontrolada e irracional en términos colectivos, de los recursos naturales renovables y no renovables, en función exclusivamente de los intereses individua-

energía de origen vegetal o mineral; la desecación de mantos freáticos subterráneos y corrientes superficiales o su irreversible polución; la contaminación del mar territorial; y como consecuencia el daño a los habitantes usuarios de los recursos o víctimas de la contaminación. La regulación y acción estatales han sido insuficientes e ineficaces para garantizar la conservación de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras de mexicanos.

El crecimiento urbano acelerado y anárquico, la excesiva concentración económica y demográfica en unas cuantas ciudades, las prácticas empresariales irracionales e irresponsables, las políticas estatales de protección del medio ambiente insuficientes e inadecuadamente aplicadas, la ineficiencia e

generar procesos agudos de destrucción de la naturaleza y contaminación ambiental. Aunque el caso extremo es la Ciudad de México, la crisis ambiental avanza en todas las grandes metrópolis y en los polos maquiladores y turísticos; sus efectos se prolongan a todo el sistema hidráulico nacional, las costas y las selvas.

La destrucción de la naturaleza, las prácticas empresariales obsoletas (sobre todo en la minería, la industria, la gran obra pública federal y la construcción), la anarquía en el crecimiento urbano, la penuria económica de los sectores populares y la irresponsabilidad e imprevisión de las burocracias estatales y paraestatales han generado un alto grado de vulnerabilidad de la ciudad y los ciudadanos ante emergencias naturales y socio-organizativas como sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios, explosiones y accidentes industriales. Esto ha costado periódicamente cientos o miles de vidas humanas y millonarias pérdidas materiales. La aceleración de la urbanización, el mantenimiento de patrones productivistas de crecimiento económico, la desregulación y la privatización incrementarán constantemente estos riesgos en el futuro inmediato y mediano.

Degradación del patrimonio histórico y cultural

México conserva un rico patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, resultante de la combinación acumulada de diferentes culturas y organizaciones sociales dominantes a lo largo de su historia. Tanto los sitios arqueológicos, como los centros históricos de nuestras ciudades y pueblos, han sido utilizados intensamente por la ideología política dominante y por las diferentes actividades económicas nacionales y



Peatones en Tijuana Foto: Pedro Valtierra/Cuartoscuro

les, ha dado lugar a: la deforestación, desertificación o erosión de una parte significativa del territorio; la desaparición de infinidad de especies animales y vegetales; el agotamiento acelerado de recursos no renovables; el consumo excesivo de

inadecuación de los servicios públicos de recolección de desechos líquidos y sólidos, las necesidades inaplazables de la población pauperizada, la irracional estructura urbana y las formas de transporte dominantes se han conjugado para

transnacionales vinculadas al turismo. Sin embargo, en términos generales han llegado a un alto grado de deterioro, particularmente los centros históricos, como resultado del abandono de los propietarios y usuarios, el desinterés del gran capital y lo limitado y episódico de las políticas de conservación; éstas se caracterizan por el monumentalismo museográfico y por el olvido del resto del patrimonio arquitectónico y cultural no catalogado y de los demás componentes vivos de la identidad cultural de nuestro pueblo, en particular los pueblos indígenas y campesinos supervivientes de esas culturas, su contenido específico e integral, y los sectores populares que hoy los ocupan y hacen vivir con su cotidianidad.

La política actual para el patrimonio histórico combina tres rasgos básicos: privilegia los grandes monumentos e ignora las pequeñas obras históricas y populares y el conjunto resultante; postula su utilización preferente en actividades culturales, turísticas de lujo y empresariales rentables, dirigidas a una porción minoritaria de la sociedad; apoya su apropiación empresarial o institucional, desplazando a los sectores populares que lo habitan o utilizan.

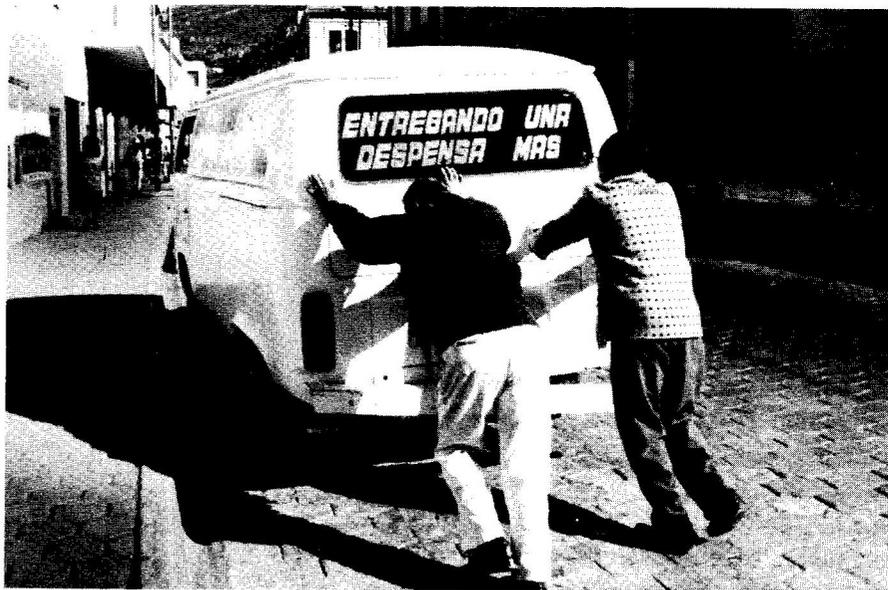
A pesar de la persistencia de un discurso historicista y nacionalista, la cultura internacional y sobre todo estadounidense subordina en la práctica las identidades culturales nacionales y sus materializaciones urbanas a las determinaciones económicas y culturales de su política neoliberal. La penetración de los medios transnacionales de comunicación, y la mercantilización de la cultura y el patrimonio histórico en el TLC, y su banalización en el mercado turístico, pueden acelerar el proceso de desintegración cultural.

Financiamiento insuficiente del desarrollo urbano y regional e inequidad de su distribución social

El financiamiento para el desarrollo regional y urbano es claramente insuficiente en relación a las necesidades. El Estado realiza centralizada y discrecionalmente su

frontera norte o los polos turísticos, donde la sociedad —a través del gasto público federal, estatal o municipal y las bajas tarifas— subsidia generosa e innecesariamente al capital foráneo.

Los criterios neoliberales de rentabilidad, privatización y asignación de recursos mediante el mercado monopolizado amenazan con



Echándole una manita Foto: Justo Suárez/Cuartoscuro

asignación, con una participación casi nula de los poderes regionales o locales y los ciudadanos y sus organizaciones sociales y políticas. Las políticas urbano-regionales del Estado lo asignan muy desigualmente, privilegiando ampliamente a las regiones y ciudades más desarrolladas y dinámicas, los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la población de altos ingresos; las regiones y ciudades atrasadas y los sectores populares reciben la menor parte, lo que les impide recuperar su retardo y postergación. A pesar de ello, los empresarios y sectores de altos ingresos son los que menos aportan proporcionalmente a la formación del fondo social de inversión y operación. La situación más contrastante ocurre en las ciudades maquiladoras de la

agravar la desigualdad en la asignación, en perjuicio de los postergados de siempre: los sectores populares y sus asentamientos humanos. Pronasol no modifica sustancialmente este hecho, y mantiene las viejas lacras del centralismo, el patrimonialismo, el corporativismo, la discrecionalidad y la manipulación política de los destinatarios.

Centralismo y autoritarismo de la gestión urbana

En la gestión urbana, como en muchos otros planos de la vida social, las regiones y ciudades han carecido de soberanía y autonomía real; el federalismo ha sido un discurso sin contenido real. En cada nivel ha operado el centralismo político y, sobre todo, el del poder federal y

de su ejecutivo, localizado en la capital privilegiada del país. Es allí donde se toman realmente las decisiones, se designa a los gobernantes y se distribuye el gasto público. Al mismo tiempo, el Ejecutivo subordina plenamente al legislativo local, regional y federal, carentes de autonomía, mediante el cordón umbilical del partido de Estado.

Este verticalismo piramidal da lugar al autoritarismo, el patrimonialismo y la discrecionalidad del Ejecutivo, que toma las decisiones al margen de la participación de los órganos legislativos, de las organizaciones políticas (incluida la gobernante), de las agrupaciones sociales representativas (aún las corporativizadas al partido gobernante) y de los ciudadanos. Las empresas paraestatales y los organismos federales son instrumentos y piezas claves de este centralismo autoritario. Sobre estas bases se sustenta la desigualdad territorial.

Los ciudadanos carecen de medios e instituciones para participar en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas que los afectan, vigilar las acciones de los tres poderes del Estado, frenar la corrupción administrativa y la represión, exigir el cumplimiento de las obligaciones de las empresas públicas y privadas de servicios de las que son usuarios o derechohabientes y hacer valer sus derechos civiles.

La extinción de la planeación territorial

En el pasado, la planeación territorial **realmente aplicada por el régimen** fue centralista, discrecional, autoritaria, no participativa, ideologizada, tecnoburocrática, sexenal y

discontinua, sectorializada y desintegrada, y concentradora; privilegió los intereses de los sectores hegemónicos, careció de instrumentos efectivos para su aplicación, fue usada demagógicamente según las razones de Estado, minada por la corrupción burocrática y no logró modificar significativamente las tendencias contradictorias de organización territorial determinadas por el patrón de crecimiento económico, estructuración política y diferenciación social. Careció de la par-



Foto: Pedro Valtierra/Cuartoscuro

ticipación activa y decisoria de los órganos legislativos, las organizaciones sociales y políticas y los ciudadanos.

El proyecto neoliberal ha ido liquidando la planeación territorial y sus instituciones, por la voluntad subjetiva del gobierno y la acción objetiva de la reestructuración de la economía y el Estado, que le quitan sus instrumentos. En su reemplazo se colocan la iniciativa empresarial e individual, el libre mercado y la concertación o negociación puntual, caso por caso, subordinada y bilateral entre el Estado y los agentes sociales particulares. Esta ausencia de planeación liberará aún más las fuerzas anárquicas de la urbanización y sus problemas derivados, y reforzará la hegemonía del gran ca-

pital industrial, comercial, financiero, inmobiliario y constructor sobre el territorio, relegando crecientemente a los sectores populares o empresariales subordinados.

Rezago de la investigación socioeconómica y tecnológica y la formación técnica y científica sobre lo territorial

Hasta ahora, el esfuerzo de investigación socioeconómica y tecnológica y la formación técnica y cientí-

fica sobre lo territorial ha sido asumido autónomamente por la universidad, algunos organismos no gubernamentales y los individuos. El apoyo estatal y privado específico ha sido muy limitado, restringido a sus necesidades operativas, subordinado a sus concepciones políticas y, en todos los casos, insuficiente para encontrar respuestas propias, socialmente válidas y viables a los problemas acuciantes del desarrollo regional y

urbano. Esta limitación ha sido más notoria en lo que se refiere al apoyo y sustentación de los esfuerzos autogestivos y autónomos de las organizaciones sociales para la solución de sus necesidades básicas de condiciones materiales de vida en campos y ciudades.

La actual política educativa y de ciencia y tecnología, signada por la rentabilidad, el productivismo, la meritocracia, el malinchismo y la sobrevaloración tecnológica, ha colocado en un segundo plano la investigación social y con ella, en gran medida, la territorial que privilegia las necesidades sociales globales y de los sectores populares, en la crítica de los procesos y la formulación de alternativas de solución.

La Ciudad de México y el sistema urbano del centro del país

La realidad de la Ciudad de México, inserta en, e impulsora del gran sistema urbano en formación en la región centro del país, es paradigmática en términos de la problemática territorial de México. Sus rasgos fundamentales son: crecimiento poblacional y físico acelerado; muy alto grado de concentración demográfica y económica relativa y absoluta; expansión física dispersa y anárquica; excesivo consumo de tierra rural y reservas naturales periféricas; mantenimiento irracional de suelo ocioso urbanizado y dotado de infraestructuras, para la especulación inmobiliaria, y escasez de suelo periférico urbanizable; altos índices de desempleo, subempleo y actividades de subsistencia; concentración de la pobreza, la indigencia y la lumpenización; creciente desindustrialización y terciarización; elevado déficit de vivienda, infraestructuras y servicios sociales para los sectores populares;

segregación territorial por clases sociales y calidad de vida; agudo problema del transporte, congestión vehicular y pérdida de productividad y eficiencia por el tiempo de circulación humana y mercantil; crecientes índices de contaminación de la atmósfera, el suelo y el agua, en su interior y en la periferia cercana o lejana; alto grado de vulnerabilidad ante macroemergencias naturales y socio-organizativas; fragmentación político-administrativa y carencia de unidad de planeación y gestión; autoritarismo y antidemocracia, particularmente en el Distrito Federal, cuyos derechos ciudadanos están restringidos.

La capital muestra claramente el divorcio entre una reforma económica acelerada y profunda y la ausencia de reforma política democrática. Es ejemplo de la falta de unidad de gestión en la metrópoli y el sistema urbano, a pesar del centralismo exacerbado. Las reformas económicas, en su conjunto, tienden a agravar todos los rasgos problemáticos para la mayoría de la sociedad capitalina. En particular, será desti-

no de una parte significativa de la migración campesina generada por el TLC y la contrarreforma agraria, y al seguir concentrando lo fundamental de la nueva inversión y la alta tecnología, guardará los más altos índices de productividad, lo que mantendrá su poder polarizador y concentrador de los efectos de las reformas económicas, incluyendo el TLC. Mantendrá por tanto su fuerza concentradora y centralizadora de la organización y el desarrollo territorial del país.

Todos estos hechos determinan la necesidad urgente de una política territorial y ambiental alternativa, integrada, democrática y popular que tenga viabilidad social en los marcos de la nueva realidad creada por la reestructuración capitalista nacional e internacional. Ella debe hacer coherente el crecimiento económico, la recuperación de las condiciones materiales y sociales de vida de los sectores mayoritarios, la democracia territorial y el tránsito hacia la equidad distributiva, la igualdad y la justicia social. ✿

TOPODRILO

S O C I E D A D A R T E Y C I E N C I A

Publicación bimestral
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Donde la ciencia, el análisis social y la creación dan vida al espacio
de lo cultural